

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Amanda de los Dolores Tamayo Londoño
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado 13 Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 013 2019 00637 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 167 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Pensión de invalidez de origen común – Dictamen decretado en primera y segunda instancia no le dan PCL igual o superior al 50%.
DECISIÓN	Confirma sentencia absolutoria

En la fecha, **cuatro (04) de agosto de dos mil veintidós (2022)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por la señora **Amanda de los Dolores Tamayo Londoño**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario que promoviera en contra de **Colpensiones**. Radicado único nacional 05001 3105 **013 2019 00637** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 023**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

La demandante convocó a juicio a la accionada pretendiendo el reconocimiento y pago de pensión de invalidez a partir del 03 de mayo de 2010, junto con los intereses de mora o indexación y las costas del proceso.

En sustento de ello afirma que, se encuentra afiliada al régimen de prima media con prestación definida desde el 9 de enero de 1974, siendo diagnosticada con artrosis primaria generalizada y ácido péptico, motivo por el cual su capacidad laboral se ha visto afectada; que le fue valorada su pérdida de capacidad laboral, estableciéndose un porcentaje del 50,27% de origen común, estructurada el 03 de mayo de 2010, contando en los tres años anteriores a dicha calenda con 50 semanas cotizadas, supuestos que le permiten acceder a la pensión de invalidez; que solicitó el reconocimiento y pago de la prestación, requiriéndosele documentos el 27 de septiembre de 2019, previa interposición de acción de tutela.

En auto del **28 de noviembre de 2019 se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, una vez enterada Colpensiones de la existencia del proceso, allegó pronunciamiento aceptando la vinculación de la actora a la entidad, que acredita 50 semanas entre el 03 de mayo de 2007 y el mismo día y mes de 2010, que presentó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, dándosele respuesta a la misma a raíz de la tutela interpuesta, contestación que fue de fondo. Frente a los restantes supuestos de hechos manifiesta que no le constan. Se **opuso a la prosperidad** de las pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó, inexistencia de la obligación de reconocer pensión de invalidez, intereses moratorios e indexación, prescripción, compensación, buena fe, la genérica, e imposibilidad de condena en costas.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en la que absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra, imponiendo costas a cargo de la demandante.

Argumentó la juzgadora que el dictamen decretado por el despacho presenta conclusiones muy diferentes al aportado por la parte, en relación con la situación de la actora, en tanto, en este refiere una pérdida capacidad laboral de 37.4%, de origen común, estructurada el 3 de mayo de 2010, mientras que el allegado da cuenta de una PCL del 50,27%, sin que se adviertan en el mismo, los anexos relacionados en el artículo 226 del C.G.P., y con ello la idoneidad del perito, lo cual si se evidencia del rendido por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, al ser una entidad competente para ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1352 de 2013, adicional a que dicha experticia no cuenta con fundamentación y es escueta, y si bien en materia laboral no hay tarifa legal, lo cierto es que cuando se trata de establecer la perdida de capacidad laboral, al tratarse de una prueba pericial, el juez si debe nombrar un experto idóneo, por tal, a la luz de la libre formación del convencimiento conforme la valoración íntegra de las pruebas según las reglas de la sana crítica, le dio credibilidad a la experticia decretada al estar bien soportada, y al no contar la actora con pérdida de capacidad laboral superior al 50%, absolvió del pago de la prestación.

Inconforme con la anterior decisión **la parte demandante interpuso recurso de apelación**, solicitando la revocatoria de la decisión y con ello, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, para ello advierte que si bien se presenta entre los dos dictámenes una diferencia frente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ello radica en la forma en que fue valorada la paciente, pues, en el aportado con la demanda fue evaluada de manera personal, observándose el grado de degradación de su salud,

mientras que en el decretado por el juzgado, no hubo contacto con la paciente de manera directa, sino a través de su historia clínica, adicional a que tampoco se tuvieron en cuenta enfermedades que si valoró el adosado al libelo inicial , por lo que insistió en la apreciación de dicha prueba.

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso **Colpensiones**, indicando que la actora no ostenta la calidad de invalida conforme a los dictámenes rendidos por la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y el Cendes, sin que cuente con mayor fundamentación técnica y científica el elaborado por la IPS Universitaria, para tener la misma con una PCL superior al 50%, adicional a que describe deficiencias que no se encuentran soportadas en la historia clínica como lo es la enfermedad de ácido péptica, por lo que solicita se confirme la sentencia objeto de revisión.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

Como hechos debidamente acreditados en los autos, no discutidos y que se tornan relevantes para resolver se tienen: que Amanda Tamayo fue calificada por la IPS Universitaria el **26 de abril de 2017**, con una **pérdida de capacidad laboral del 50,27% estructurada el 3 de mayo de 2010**, por los diagnósticos de "*ARTROSIS PRIMARIA GENERALIZADA*" y "*ENFERMEDAD ACIDO PEPTICA*". En el trámite de primera instancia se ordenó nueva calificación integral de la merma de capacidad laboral a la demandante, realizado por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia el 21 de septiembre de 2020, fijándole una PCL del **34,7%**, de origen común, con fecha de estructuración el **03 de mayo de 2010**, por el diagnostico de "*OTRAS ARTROSIS ESPECIFICADAS*". De manera oficiosa esta Sala dispuso la valoración de la señora Amanda Tamayo, por parte del

CENDES, entidad que estableció que presenta una PCL del 38,7% estructurada el 18 de junio de 2021, data de la *"realización de la Densitometría ósea que evidencia la actual existencia de una Osteoporosis, que es la última patología documentada que presenta."* Considerándose como diagnósticos *"Artrosis primaria" "Osteoporosis" "enfermedad ácido-péptica"*

Conforme a lo anterior, **el problema jurídico** se circunscribe a establecer la eficacia probatoria del dictamen aportado con la demanda, respecto al practicado en primera instancia y el decretado de manera oficiosa, a fin de determinar si a la demandante, le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez.

Pues bien, debe decirse que la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-873 de 2013 ha considerado la calificación de la pérdida de capacidad laboral como un derecho que tiene toda persona, el cual cobra gran importancia al ser el medio para la realización efectiva de otras garantías fundamentales como la salud, la seguridad social y el mínimo vital, en tanto que permite determinar a qué tipo de prestaciones tiene derecho el afectado por una enfermedad o accidente, producido con ocasión o como consecuencia de la actividad laboral, o por causas de origen común.

Así, atendiendo la Jurisprudencia Constitucional, la calificación de la pérdida de capacidad laboral debe considerar las condiciones específicas de cada persona, valoradas sistemáticamente, dicha valoración puede tener lugar no solo como consecuencia directa de una enfermedad o accidente de trabajo, claramente identificado, sino también, de patologías que resulten de la evolución posterior de esta enfermedad o accidente, o, a su vez, por una situación de salud, inclusive de origen común.

De la misma manera dicha corporación ha establecido reglas procedimentales básicas que rigen las actuaciones de las entidades encargadas de calificar la pérdida de capacidad laboral, y que conforman los contenidos mínimos del derecho fundamental al debido proceso en esta clase de trámites, encontrándose dentro de ellas: *"ii) **La valoración del estado de salud de la persona calificada debe ser completa e integral, pues las juntas deberán proceder a realizar el examen físico correspondiente, y al sustanciar y proferir el respectivo dictamen deben tener en cuenta todos los aspectos médicos consignados en la historia clínica y ocupacional del paciente**"* (sentencia T 713 de 2014 y T 093 de 2016).

El artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con Colpensiones, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de establecer, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante, lo establecido en esta disposición legal, ninguna duda queda que tales dictámenes pueden ser debatidos judicialmente, en tanto, es posible que dentro de un trámite ante la justicia ordinaria se puedan acreditar los errores en que pudo haber incurrido una pericia, por cualquier medio probatorio, atendiendo que en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley. De acuerdo con ello, las partes tienen libertad probatoria, pudiendo acreditar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba.

Así, al haberse decretado por parte de la juez de primera instancia, de manera oficiosa, la calificación integral de la demandante, la misma fue remitida a la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia,

quien como ya se dijo en dictamen del el 21 de septiembre de 2020, estableció un porcentaje de PCL del **34,7%**, de origen común, con fecha de estructuración el **03 de mayo de 2010**, por el diagnostico de "*OTRAS ARTROSIS ESPECIFICADAS*", **el cual se encuentra debidamente fundamentado en la historia clínica, considerándose todas las patologías tratadas, las que fueron correctamente baremadas,** coincidiendo con el de la IPS Universitaria solo en la fecha de estructuración fijada.

Sin que pueda perderse de vista que este dictamen de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, se asemeja, en cuanto a la PCL, al decretado en esta instancia de oficiosa, en tanto, este determinó que la señora Amanda **presenta una PCL del 38,7% estructurada el 18 de junio de 2021,** data de la "*realización de la Densitometría ósea que evidencia la actual existencia de una Osteoporosis, que es la última patología documentada que presenta.*" Valorándose los diagnósticos de "*Artrosis primaria*" "*Osteoporosis*" y "*enfermedad ácido-péptica*" y teniendo en cuenta para ello, examen médico general, físico, osteomuscular, de extremidades, neurológico, así como una evaluación de su estado mental, dejándose sentado que para dicha calificación "*es necesario tener en cuenta que, dentro de los daños a tener en cuenta, no se pueden incluir las condiciones relacionadas con el deterioro propio de la edad de la señora Tamayo, sino que se debe referir a la secuela o condiciones de salud actuales derivadas de patologías evidenciadas en la historia clínica, donde se referencien los medios diagnósticos, terapéutico, evolución y estado actual*". Calificación, que se encuentra acorde a las deficiencias baremadas, y como se indicó no difiere mucho de lo concluido por el ordenado por la Juez de instancia, ofreciendo plena credibilidad a la Sala, y que en lugar de desvirtuar confirma el atacado, que fue decretado en primera instancia, valorándose de manera directa a la actora, sin que sea posible modificar ninguno de los aspectos, no solo por carecer los juzgadores de los conocimientos técnicos para hacerlo, sino porque la jurisprudencia especializada es clara en indicar que:

*si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, **pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros**, así se explica en sentencia SL1021 – 2019 radicado 62309 del 27 de marzo de 2019*

Así las cosas, al ser los medios de convicción anotados los idóneos para determinar tanto el grado de pérdida de la capacidad laboral como la fecha de estructuración de la misma, al haber sido emitidos por organismos especializados en el tema y autorizados por el legislador, estos se tienen como invariables, pues, dichos conocimientos técnicos y científicos tienen que ser refutados por un medio igual, al carecer el operador judicial de ellos (ver sentencia SL1021-2019), y al desvirtuar estos las conclusiones del dictamen de parte de manera objetiva y atendiendo los diagnósticos, historias y valoración de la actora, lo procedente es la confirmación de la decisión revisada.

Costas en esta instancia a cargo de la actora a quien se desata adversamente el recurso. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$500.000,00.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **confirma** la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de esta ciudad dentro del proceso ordinario promovido por señora **Amanda de los Dolores Tamayo Londoño** en contra de **Colpensiones**.

Costas en esta instancia a cargo de la actora a quien se desata adversamente el recurso. Inclúyanse como agencias en derecho la suma de \$500.000,00.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO**, que se fijara por **secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado